

Arica, veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

VISTO:

En el rol único de causas N° 2000809727-6 correspondiente al rol interno del tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica N° 94-2022, la Defensora Penal Privada doña Lin-Kiu Ly Fumey, en representación del condenado Ángel Manuel Segundo Rivera Rivera interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia pronunciada el dieciséis de junio del año en curso, por los Jueces del tribunal anteriormente mencionado, señor Mauricio Javier Petit Moreno y señoras Caroline del Pilar Guzmán Muñoz y Fabiola Andrea Collao Contreras, quienes condenaron al citado Rivera Rivera, a sufrir la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, al pago de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales, más las accesorias contempladas en el artículo 28 del Código Penal; ello, por su participación en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes establecido en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley N° 20.000, hecho sorprendido en esta ciudad, el 30 de julio de 2021.

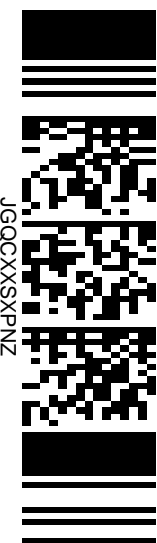
Funda su recurso en dos causales: primeramente dedujo la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal y, en subsidio, la estatuida en el artículo 374 letra e) del citado texto legal.

Es preciso consignar que para acreditar sus asertos, la recurrente ofreció rendir prueba consistente en el acta de declaración voluntaria del imputado efectuada el 19 de noviembre de 2021, como asimismo el audio correspondiente a la audiencia del 343 del Código Procesal Penal: sin embargo en la audiencia en que se conoció el presente recurso, esto es, el veintidós de julio último, la parte recurrente representada por el abogado Francisco Gajardo Contreras, no rindió probanza alguna; a su vez por la parte recurrida, es decir, el Ministerio Público, alegó la abogada Ingrid Castro Mollo; quedando posteriormente la causa en acuerdo, previa fijación de la lectura del fallo para el día hoy.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- EN CUANTO A LA PRIMERA CAUSAL DEDUCIDA:

PRIMERO: Que la abogada Lin Kiu Fumey, dedujo el recurso de nulidad para que esta Corte lo acoja, declare nula la sentencia en la parte



que no accedió a tener por acreditada, en favor de su representado, la minorante del artículo 11 N° 9 del Código Penal y, en concurrencia con la atenuante de irreprochable conducta anterior que le favorece a aquél, le rebaje la pena en un grado y se le sustituya por la de libertad vigilada intensiva.

SEGUNDO: Que para tal efecto, la recurrente invocó la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, situación que, a su juicio, habría acontecido por el no reconocimiento de la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal.

Fundamentando su arbitrio procesal y luego de transcribir el hecho que tuvo por establecido el tribunal, y señalar en síntesis, que su parte nunca discutió la existencia de los hechos ni la participación de su defendido, sino que sus alegaciones estuvieron encaminadas al acogimiento de dos circunstancias atenuantes: la irreprochable conducta anterior de su defendido y, además, que éste habría colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos.

Prosigue la recurrente efectuando citas doctrinarias respecto a esta última morigerante, la historia fidedigna del establecimiento de la misma, luego transcribe parcialmente el considerando decimocuarto de la sentencia impugnada como asimismo extractos de diversos motivos del fallo en análisis, indicando posteriormente que el reconocimiento de los hechos realizado por su representado liberó al ente acusador de la carga de la prueba con el estándar de convicción requerido para condena.

Finaliza la recurrente señalando citas doctrinarias y extractos de diversos fallos dictados por Tribunales del país respecto a la materia.

TERCERO: Que en primer término, es dable recordar que el hecho de acoger la circunstancia atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, debe ser entendida como un beneficio para el acusado, más no un derecho para éste, y para que dicha minorante sea acogida, la colaboración prestada debe estar destinada ya sea al



esclarecimiento del hecho punible propiamente tal, o a la intervención que en él ha tenido el imputado.

En efecto, para que tal morigerante se configure a favor del encausado no basta su simple confesión, sino que además, se requiere una voluntad de cooperación a la labor de investigar y esclarecer lo sucedido, la que debe ser primordial en que ello ocurra. Es decir, que la información proporcionada sea de tal forma relevante que permita a los órganos persecución penal establecer alguno de los elementos del tipo penal o de la participación del acusado, que de otra manera, no pudieren haber sido probados.

CUARTO: Que efectuada una atenta lectura al fallo impugnado, estos juzgadores concuerdan con lo expresado con los sentenciadores del grado en orden a que la declaración del imputado carece de la sustancialidad requerida en los términos señalados en el motivo precedente.

Sobre el particular, cabe mencionar que si bien la recurrente expresa en su libelo que la colaboración prestada por su defendido queda en evidencia no solo con lo expresado por éste, sino que además, con lo manifestado por la testigo Consuelo Muñoz durante la secuela del juicio oral, para cuyo efecto ofreció rendir como probanza las citadas declaraciones, lo cierto es que durante la audiencia en que se conoció el presente recurso, no rindió prueba alguna al efecto, razón por la cual estos sentenciadores únicamente pueden abocarse al contenido de la sentencia impugnada, la cual, como se dijo, no permite catalogar de “sustancial” la declaración del enjuiciado.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, la Excelentísima Corte Suprema pronunciándose respecto a esta materia en los autos rol N° 26855-18, ha manifestado: “la pretensión del recurrente de otorgarle el carácter de sustancial a la declaración prestada por el encartado durante la audiencia del juicio oral, no dice relación alguna con la aplicación errónea de la norma contenida en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, sino que más bien alude a la interpretación que los jueces del grado dieron a los hechos que podrían o no configurar la minorante de colaboración sustancial, lo que por cierto excede de los márgenes de la causal en comento, la que por lo mismo será también desestimada.



En todo caso, el carácter de "sustancial" y su reconocimiento están reservados a las atribuciones de los jueces, de manera que el rechazo de ese carácter queda al margen del recurso de nulidad fundado en una infracción de ley”.

I.- EN CUANTO A LA SEGUNDA CAUSAL DEDUCIDA:

SEXTO: Que en subsidio de la causal de nulidad anteriormente analizada, la abogada Lin-Kiu Ly Fumey, invocó la prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal; es decir, haber pronunciado la sentencia con omisión de alguno de los requisitos previstos en los artículos 342, específicamente el de la letra c) y 297, ambas disposiciones contenidas en el citado texto legal; esto es, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.

Fundamentando su intrincado arbitrio procesal y luego de transcribir los artículos 297 y 342 del Código Procesal Penal refiere, en síntesis, que los juzgadores del grado al desestimar, en el considerando decimoquinto, la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos no se hicieron cargo de toda la prueba rendida, generando con ello una falsa fundamentación o fundamentación aparente.

Prosigue el enmarañado recurso con la transcripción parcial de diversos considerandos, luego indica páginas de la sentencia, todo lo cual impide a estos juzgadores comprender con total claridad los fundamentos que tuvo la recurrente para deducir la causal de nulidad en análisis, esbozando finalmente que ello dice relación con la falta de valoración de la prueba documental incorporada por su parte en la audiencia del artículo 343, consistente en la declaración que efectuó su representado ante el O.S.7 el 19 de noviembre de 2021, la cual remitió al tribunal para su valoración; sin embargo, los sentenciadores del grado no emitieron pronunciamiento alguno sobre el particular.

SEPTIMO: Que en primer término es menester dejar asentado, tal como lo establece el artículo 296 del Código Procesal Penal, que la prueba



que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvo las excepciones legales.

Pues bien, la audiencia del juicio oral culmina con los alegatos de clausura, de suerte tal, que aun cuando efectivamente la defensa hubiese acompañado la prueba documental que menciona en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, los jueces no se encontraban obligados a valorarla en conformidad a lo previsto en el artículo 297 del citado código, como lo pretende la recurrente.

OCTAVO: Que no obstante lo anteriormente anotado, y sin perjuicio que la recurrente expresa haber “remitido” dicha probanza al Tribunal, lo cierto es que en parte alguna del fallo se hace mención a la misma, situación que impide a estos sentenciadores a emitir pronunciamiento sobre el particular, máxime que, según lo expresado por la propia recurrente se trata de una declaración prestada por su representado el 19 de noviembre de 2021, es decir, con mucha antelación a la realización de la audiencia del juicio, por lo que acorde a lo expresado precedentemente los jueces, no se encontraban obligados a valorar probanzas que, en el hipotético caso de haber sido incorporadas, tal incorporación no aconteció acorde a lo previsto en el Código Procesal Penal, lo que conlleva necesariamente a desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además a lo dispuesto en los artículos 342 letra c), 360, 373 letra b), 374 letra e) y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la Defensora Penal Privada doña Lin-Kiu Ly Fumey, en representación del condenado Ángel Manuel Segundo Rivera Rivera, y se declara que la sentencia dictada el dieciséis de junio del año en curso, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad en su rol interno N°94-2022, correspondiente al rol único de causas N° 2000809727-6 no es nula, como tampoco el juicio en que ella incide.

Regístrese, notifíquese y comuníquese vía interconexión.

Redacción de la Ministra María Verónica Quiroz Fuenzalida.

No firma el Ministro Suplente don Gonzalo Brignardello Cruz, por haber cesado en sus funciones.

Rol N°333-2022.- Penal.





JGQCXXSPNZ

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica integrada por los Ministros (as) Maria Veronica Quiroz F., Hector Cecil Gutierrez M. Arica, veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

En Arica, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

